

Argentina: ¿De qué crisis hablamos?

Dr. Felipe de J. Pérez Cruz
Inv. Auxiliar.

La República Argentina, se ha convertido en un tema de actualidad en el espectro mediático. Las frecuentes noticias que califican la profundidad de la crisis económico social en el país sudamericano, y alertan sobre los peligros de una crisis de gobernabilidad; por su propia intencionalidad, dinámica y alcance, compiten a menudo con el ejercicio de la evaluación analítica y sintetizadora que debe aportar las Ciencias Sociales.

En este artículo al enfocar desde una perspectiva histórica la coyuntura argentina me propongo, precisamente, adelantar un marco referencial que aporte los principales elementos analíticos, para apreciar la problemática situación por la que atraviesa el país. Acredito que más allá de lo que se nos promociona, estamos ante una crisis del modelo neocolonial impuesto al país.

Considero que en la implementación del proyecto neoliberal en Argentina durante la última década del siglo XX, hay que buscar las causas de última instancia, de la crítica situación que hoy atraviesa el país sudamericano. La actualidad de la nación rioplatense acredita como el neoliberalismo, al promover profundas alteraciones en las estructuras sociales, culturales y económicas, de consecuencias regresivas, se constituye en una fuerza de desintegración que en la medida que alcanza sus objetivos - y como condición para alcanzarlos - levanta serios obstáculos para el avance progresivo de nuestros pueblos.

La implantación del modelo neoliberal

La situación económica de Argentina acusa un deterioro notable desde finales del siglo pasado. La llamada "década perdida" de los 80, partió con las devaluaciones masivas durante la dictadura, siguió con una deuda externa sin precedentes y finalizó con la hiperinflación que dio al traste con el mandato de Raúl Alfonsín en 1989. En aquellos momentos el producto interno bruto (PIB) había caído al 23 por ciento y el ingreso nacional per capita en términos reales bajó 28 por ciento.

A mediados de 1990, Kurt Schuler y Steve H. Hanke propusieron un anteproyecto para resolver los problemas de la economía argentina, en primer lugar la hiperinflación que hacía inviable el avance del proyecto neoliberal en el país. (Steve H. Hanke, Auge y caída de Argentina, Forbes Global, abril 2001). El centro de la propuesta de los especialistas norteamericanos era la creación del Banco Central o Caja de Conversión.

El presidente Carlos Saúl Menem adoptó la idea en 1990. Para llevar adelante la propuesta de los especialistas norteamericanos Menem movió a su ministro de Relaciones Exteriores, Domingo Cavallo, al ministerio de Economía. Cavallo y su equipo pronto hicieron un borrador de la Ley de Convertibilidad y el 1º de abril de 1991 se le impuso al Banco Central la convertibilidad.

La Ley de Convertibilidad en sentido estricto, estableció un régimen cambiario y monetario en el cual el Banco Central está obligado a comprar y vender sin restricciones los dólares que se ofrezcan y demanden, a una tasa de cambio de un peso a un dólar, fijada por ley congelada. Además, hay un compromiso de no emisión de base monetaria más allá de una cierta proporción de las reservas internacionales, cercano a la relación de 1 dólar en las reservas contra el equivalente a 1 dólar de base monetaria.

Los resultados de esta “reforma” en el periodo de 1991- 94 fueron impresionantes. Con la aplicación del Plan de Convertibilidad la inflación anual que era de 1,345% en 1990 se redujo sustancialmente. y el PIB per capita en dólares se incrementó en un 72.8%. Entre 1990 y 1994 el ingreso nacional creció el 37 por ciento.

El objetivo primario de la convertibilidad como mecanismo contra la hiperinflación pronto fue sobreevaluado. Lo que debió haber sido una herramienta monetaria de emergencia comenzó a adquirir permanencia, al punto de convertirse en el eje del modelo neoliberal en el país.

La ligazón entre convertibilidad y modelo se manifestó en varias dimensiones. En particular, la convertibilidad se plantea financiar los desequilibrios fiscales con nuevas deudas o privatizaciones; hace depender la estabilidad de los precios de la entrada de importaciones baratas, así como el nivel de actividad económica se establece en función de la entrada de capitales. De ahí que la convertibilidad pasara de ser más que una forma de actuación del Banco Central, un modo global de conducción de la economía (3)

Para que la convertibilidad funcione no deben existir déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos (que incluye los saldos de mercancías, servicios reales y financieros), ni fiscal. Y para alcanzar tales propósitos los arquitectos del neoliberalismo en Argentina solo tenían dos fórmulas: que las exportaciones generaran las divisas para asegurar el equilibrio externo o procurarse esa masa financiera por la vía de la comercialización y venta de los recursos de la nación. Con una filosofía a la que le es extraña la atención y protección al desarrollo de la industria y las potencialidades económicas nacionales, y en consecuencia con muy limitadas posibilidades de reactivar la deteriorada balanza comercial, los directores de la “reforma” no podían ni querían trascender su naturaleza mercantil. Así el corolario de la convertibilidad pasó a ser el programa de privatizaciones.

El modelo con base en la convertibilidad funcionó en los primeros años porque entraron suficientes capitales para financiarla. Primero fueron las privatizaciones y después la inversión directa extranjera, pero cuando se fueron agotando esos recursos empezó a crecer la parte del endeudamiento externo en el financiamiento de la convertibilidad. Y esta es la principal consecuencia directa de la convertibilidad.

La inmensa mayoría de los Estados, y en particular los del Tercer Mundo, funcionan con un nivel de crédito para cubrir los espacios que generan el déficit fiscal y las necesidades del desarrollo. Pero en Argentina desde que se impuso la convertibilidad, la economía no funciona si no le prestan. El gobierno de ese país no solicita préstamos para cubrir determinados déficits en sus presupuestos, sino que pide prestado para pagar. Así la deuda se constituyó en un mecanismo de financiamiento permanente y las exportaciones como instrumento de financiamiento más genuinos perdieron su trascendencia estratégica. En tal proceso degenerativo la economía argentina se hizo deudora dependiente, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial adquirieron una importancia decisiva en el diseño de la política en el país.

En 1999 los problemas económicos en Argentina se tornaron serios luego de una década de neoliberalismo y de tres años de creciente recesión económica. Sin crecimiento y sin inversiones productivas, el gobierno del presidente Carlos Menem, ya había dado fin a lo que se conoció como período de “la fiesta menemista”, y con ello a la ilusión de que el país “entraba al Primer Mundo”. Ya ese año el PIB decreció en un 3,4 por ciento (4).

Los nuevos actores de poder

Para finales del mandato de Menem los grandes grupos económicos ligados al capital transnacional europeo básicamente, habían alcanzado un protagonismo particular en la vida política argentina. Capitales españoles, alemanes y británicos fueron los principales postores de la privatización argentina, con lo que el país además de perder sus más valiosas empresas estatales, abrió sus flancos a la extranjerización de toda su estructura productiva, de servicios y finanzas. Al mismo tiempo los monopolistas norteamericanos, mantuvieron un lugar privilegiado entre los inversores de capital y se implicaron sustancialmente al financiamiento de la convertibilidad y al cobro de los intereses de la deuda externa, constituyendo el otro influyente sujeto externo de poder en el país.

Las consecuencias políticas de la pérdida de soberanía frente a los instrumentos financieros del capital transnacional, se manifestaron en las condicionalidades incluidas en los acuerdos stand by con el FMI, de donde surgen dos secuelas principales: en primer lugar determinan la orientación general de la política económica; luego, inciden sobre la estructura del poder. Las misiones del FMI dejaron de tener como eje el examen de las posibilidades del repago de los préstamos externos: ahora imponen medidas de política, tales como la estructura del presupuesto nacional, la privatización de empresas y de bancos, el

desmantelamiento de proyectos no gratos a Estados Unidos, la flexibilización laboral.

El estudio a fondo de la marcha de las contradicciones interimperialistas entre estos dos sujetos principales que actúan en Argentina directamente o a través del sector burgués transnacionalizado que le es afín en el país, puede proporcionar elementos para explicarse los perfiles más sustanciales de la política gubernamental.

La nueva concentración económica que trajo aparejada la privatización y extranjerización de las estructuras económicas del país, consolidó una nueva elite de poder que ha sido denominada con el vocablo inglés de *stablishment*. Con independencia de la nacionalidad argentina de algunos de sus asociados, o de que se expresen a través de entidades con siglas nacionales, responde esencialmente a los grupos extranjeros. (1)

El llamado *stablishment* reafirma su poder económico y político a través de mecanismos reales de diseño, organización e instrumentación de decisiones, posee un poderoso aparato de control opinático y cuenta con importantes elementos directamente vinculados al ejercicio de la política nacional. Es una condición fundamental para la reproducción y profundización de su dominio que todos los resortes del poder político se encuentren lejos de cualquier institución que dependa de modo directo o indirecto de la voluntad popular, ya se trate del poder ejecutivo, el legislativo o el judicial.

Aunque en la Argentina de hoy es consensual que esta elite es la que pone y quita políticos, define las estrategias y en apoyo a ellas trazan las pautas de los medios de comunicación, el problema del poder y en particular la toma de decisiones no puede reducirse sólo a tan significativa presencia. El bloque burgués aún continúa presentando otras vertientes, en particular se dibujan los intereses de las pequeñas (P) y medianas empresas (ME) muy vinculadas al sector exportador vía Mercosur.

En general en el espectro de la construcción de la estrategia política que debe seguir el país, son evidentes las contradicciones entre el sector burgués productivo —donde está lo que queda de burguesía nacional— y el bancario transnacionalizado —en el que se asienta el núcleo más orgánico del *stablishment*—. Según Carlos Gabetta “dos proyectos de país, el especulador de “mano dura” y el democrático-productivo, acumulan fuerzas para ofrecerse como alternativa a un sistema agotado. (12)

Pobreza y enajenación: los corolarios del modelo

El nacimiento y desarrollo de la burguesía transnacionalizada en el país y la reproducción en general de la clase burguesa en las condiciones de la década de reforma neoliberal trajo aparejado el crecimiento de los sectores pauperizados, de la pobreza y la indigencia como sus corolarios. Ya durante 1999 se difundió un

documento del Banco Mundial - 30/4/99 - en el cual se registró la evolución y magnitud de la pobreza por ingreso en todo el país (y no solamente en los grandes centros urbanos). El resultado fue impactante, toda vez que según las proyecciones realizadas el 36,1% de la población argentina se encontraba por debajo de la línea de pobreza, o sea, 13,4 millones de personas. Al desagregar el análisis sobresalía la huella del desigual desarrollo capitalista del país. En regiones como Cuyo, Noroeste y Nordeste el porcentaje de desocupación rondaba o superaba el 50% de la población

Según el citado Informe del Banco Mundial, el promedio de indigencia a nivel nacional ascendía a finales de los noventa a 8,6% de la población (3,2 millones de personas). En el Noroeste y Nordeste el promedio rondaba el 18% de los habitantes de dichas regiones (8)

En general la desigualdad entre los sectores de la población con mayores y menores ingresos se triplicó en los últimos 25 años de acuerdo con un estudio realizado por la consultora Equis, que dirige el sociólogo Artemio López. El estudio, basado en la oficial encuesta permanente de hogares (EPH), señaló que en 1974 el 10 por ciento más rico de la población ganaba ocho veces lo que el 10 por ciento más pobre, pero esa brecha se amplió a 19 veces en 1990 y a 24 en 1999. Según López "solo en el último año, la diferencia aumentó a 26 veces", como consecuencia de los dos ajustes sucesivos (aumento de impuestos y reducción de salarios de empleados públicos) que implementó sucesivamente el gobierno del presidente Fernando De la Rúa.

El estudio de Equis enfatiza que la creciente desigualdad en la distribución del ingreso ha llevado a que casi cuatro millones de argentinos - sobre una población total de 36 millones -, tenga que afrontar sus gastos mensuales con apenas 34 pesos o dólares. Sostuvo además que el 75 por ciento de la población no alcanza a duplicar los valores que marcan la línea de pobreza (estimada en 500 pesos mensuales) y cuentan con ingresos inferiores a mil pesos para una familia tipo. Siempre en base a datos oficiales, Equis afirma que la media de los hogares argentinos tienen un ingreso promedio mensual de 960 pesos, cuando la canasta familiar básica de alimentos supera los mil pesos, puntualizo el trabajo. El estudio de Equis puso de relieve además que el empleo público es el origen de los ingresos para un tercio del 20 por ciento de los hogares más pobres y para el 25 por ciento de los hogares más ricos, estos últimos encabezados por legisladores, jueces y políticos provinciales. (9).-

Los problemas de la pobreza se agudizan por el desigual desarrollo existente entre las distintas regiones del país. Las provincias con mayores diferencias son además las más pobres, pues en Formosa, donde el 55 por ciento de la población vive bajo la línea de pobreza, la brecha de ingresos es de cinco mil 700 veces, seguida por Chaco (cuatro mil 166) y Tucumán (tres mil 215). (10).-

En vista de lo indicado, se confirma el hecho de que la pobreza constituye uno de los aspectos centrales del nuevo escenario social de la Argentina de fin de siglo,

donde la situación social se agrava aún en contextos de inflación nula. Se puede decir, en síntesis, que la pobreza se ubica en la intersección entre los problemas del viejo cuño y los problemas emergentes.

Detrás de la devaluación cuantitativa del número de pobres se esconde la profundización de algunos elementos ya presentes en el pasado, como las dificultades globales para detener y revertir el deterioro en las condiciones de vida material de amplios sectores de la sociedad, así como para disminuir la brecha de desigualdad en la distribución del ingreso. Pero, al mismo tiempo, la pobreza también deja traslucir una serie de temas emergentes vinculados de una u otra forma a la exclusión y desintegración social, entre los que destaca el aumento de una serie de índices referidos a violencia, drogadicción, alcoholismo y prostitución, entre otros. Esto implica que no sólo se está ante una pobreza heterogénea, sino que al mismo tiempo se diversifican los problemas sociales asociados a dicho fenómeno.

El aumento en flecha de la violencia individual, así como los marcados cambios en la conducta individual de millones de personas son síntomas de descomposición social y constituyen un estridente aviso sobre la ausencia de perspectivas capaces de transformar la adversidad en voluntad de lucha y la desesperación en búsqueda colectiva del cambio social. (11)

La gravedad de la situación no estriba principalmente en los efectos económicos de la crisis capitalista sobre las masas desposeídas, sino en que éstas carecen de todo y cualquier recurso para afrontarlos. Sin organizaciones sociales reconocidas y sin partidos con autoridad ante las masas, la lucha por el reparto de la renta nacional ha dado lugar a la generalización de la delincuencia en todas las formas imaginables.

La sociedad política de radicales y justicialistas

La crisis de la variante castrense permitió el retorno en Argentina de la fórmula clásica de gobierno demoliberal en condiciones favorables para reconstruir el bloque histórico de la dominación capitalista en el país. El terrorismo de Estado aplicado por los militares golpistas contra el movimiento revolucionario del país y la crisis ideológica y política de las organizaciones de izquierda, tras la dábacle del socialismo soviético, junto otros factores históricos específicos, colocaron en situación de disgregación y parálisis al movimiento obrero y progresista argentino, lo que permitió centrar el debate político nacional en la tradicional disputa interburguesa que personifican, en este caso, justicialistas y radicales como fuerzas partidistas centrales de ese sistema político.

Desde los temas básicos y las visiones que defienden los dos partidos centrales de la sociedad política argentina se extiende el entretejido de numerosas organizaciones partidistas y grupos de presión que representan dentro del bloque burgués intereses sectoriales, regionales y provinciales.

En el caso de la Unión Cívica Radical, partido histórico de la oligarquía liberal, su compromiso con los sectores productivos y exportadores, es fuerte. También es importante considerar la vicepresidencia que tiene la UCR en la Internacional Socialista. Tal alineación del partido de los radicales, y en particular de Raúl Alfonsín, vicepresidente para América Latina de la Internacional Socialista tiende a reforzar en la actuación de sus figuras parlamentarias y gubernamentales, las posiciones ideológicas y políticas de la socialdemocracia europea y constituye un canal político que fortalece la relación con el viejo continente. Quienes en sus filas defienden enfoques neoclásicos, lo hacen con una perspectiva más heterodoxa. Lo que en particular se manifiesta en su casi unánime voto por el fortalecimiento del actual esquema integracionista del Mercosur.

El Partido Justicialista cada vez más alejado de los postulados peronistas - de Juan Domingo Perón -, que dice acreditar, convertido por su presidente Menem en un fuerte defensor de las tesis neoliberales, tiene por esa vía una fuerte comunicación con los intereses del establishment. Realizó algún esfuerzo para relacionarse con la Internacional Demócrata Cristiana, pero esta opción, al parecer de analistas, respondía, más que a determinaciones de naturaleza genética, al interés pragmático de vincularse en referencia con la UCR, con una matriz ubicada en el otro polo político ideológico importante de Europa. La dirección de este partido, cuya cabeza política e ideológica más visible es el propio Menem, no ha dudado en afirmar su simpatía con las corrientes más conservadoras del espectro político norteamericano.

El PJ como organización que reivindica al peronismo extiende su influencia en el amplio movimiento político peronista y en particular controla la burocracia sindical de la Confederación General de Trabajadores de Argentina (CGTA), la más importante central sindical del país.

En octubre de 1983, al frente de la UCR, Raúl Alfonsín, ganó las elecciones que dieron fin a la última dictadura que desgobernó ese país, y con ello el sistema político argentino retomó el cauce de la competitividad y alternancia como mecanismo de equilibrio político social. En esta dinámica Alfonsín entregó en 1989 la presidencia del país, al candidato triunfador en las elecciones, el "peronista" Carlos Saúl Menem. Era la primera vez desde 1928 en que un presidente civil no era derrocado por las Fuerzas Armadas y podía entregar su mandato a su sucesor.

Menem durante sus primeros años de gobierno usufructuó políticamente, la aplicación de la convertibilidad y el auge del modelo en su fase de implantación. Captada en provecho de su administración la renta de las privatizaciones y convertidos los trabajadores y los ciudadanos en general en los usuarios cautivos del modelo, el presidente logró establecer un sólido lazo social en el que la proclamada estabilidad de la moneda, apuntalaba su imagen. Tal consenso pragmático fue consolidado a través de un poderoso aparato de hegemonía ideológica, con un sistemático trabajo de propaganda política y construcción de la imagen carismática del presidente. De esta forma se creó un consenso de

seguridad y confianza a favor de la figura del mandatario y toda propuesta para salir del laberinto de la convertibilidad, desde la reactivación del mercado interno hasta la devaluación, fue presentada como una herejía. Tal realidad —sustentada además en una invisible subtrama de corrupción que partía de la propia Casa Rosada y enlazaba al Congreso, el Poder Judicial, la burocracia partidista y sindical y la elite económica—, se constituyó en la base de ideológica y política de las reformas neoliberales en el país.

El pacto bipartidista de la elite burguesa en el país se puso nuevamente en evidencia en diciembre de 1993. Entonces a iniciativa del presidente Menem se concertó un acuerdo entre peronistas y radicales para modificar la Constitución, reduciendo el mandato presidencial de seis a cuatro años, y a cambio se permitía la reelección consecutiva. La decisión entre las cúpulas de los dos partidos, fue refrendada por las dos cámaras del Congreso.

Alfonsín había cedido frente a Menem en el proyecto de reforma constitucional consciente de que en lo inmediato, el gobierno presidido por los peronistas gozaba de la preferencia. Consciente del carácter cortoplacista del proyecto menemista, el caudillo radical apuntó al desgaste del justicialismo.

En las elecciones convocadas para la Asamblea Constituyente, el Partido Justicialista ganó la mayoría y en la contienda electoral federal de 1994, Menem logró su propósito personal de salir reelecto. Como elemento más visible del proyecto neoliberal en su vertiente ideopolítica, estuvo el hecho de que en el período de lucha electoral la gran mayoría de la sociedad se mantuvo prescindente.

El fenómeno de la toma de distancia del conjunto social respecto de la vida política tiene signo positivo para el mantenimiento del sistema. Coloca a la clase obrera —y tras ella a la inmensa mayoría de la población— al margen de la participación política, y por tanto en disposición a servir como eventual masa de maniobra para las operaciones de las diversas fracciones de la burguesía. (Luis Bilbao. La gran prueba. Crítica de Nuestro Tiempo No. 25. Buenos Aires. diciembre 2000–marzo 2001 p.6). Tal fue el caso del nacimiento del Frente por un País Solidario (FREPASO).

El Frepaso apareció como una fuerza política —de centro izquierda— independiente en 1995. Planteó la necesidad de luchar por un gobierno limpio de la corrupción reinante en el menemismo y por políticas económicas más equitativas. Logró captar el descontento y la protesta de sectores laborales y populares, el grueso de la juventud e incluso sectores muy amplios de las capas medias, que comienzan a incorporarse a la lucha política contra el menemismo. Así su nacimiento y fulgurante desarrollo tuvo como causa determinante la voluntad de miles de luchadores sociales y de jóvenes recién iniciados en la vida política de participar, de hacerse escuchar, de ser protagonistas y defender los reclamos y anhelos a favor de un cambio en el diseño del país. (Luis Bilbao.

Réplica a la Carta a los argentinos. Crítica de nuestro tiempo. No. 25. Buenos Aires. Diciembre 2000–marzo 2001. P.17).

La campaña para las elecciones generales del 24 de octubre de 1999 se desarrolló en el escenario de crisis de las fórmulas menemistas, tanto en lo económico como en lo político. A pesar de atribuirse a la tradición peronista la defensa de los intereses de la nación y de los trabajadores; la década transcurrida demostraba fehacientemente la orientación antipopular y antinacional del gobierno del Partido Justicialista. Y sobre estas realidades se dirigió la labor de los opositoristas.

La Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, unió a los dos principales partidos de la oposición, el Partido Unión Cívica Radical (UCR) liderado por el expresidente Raúl Alfonsín y el Frente por un País Solidario (Frepaso) cuya principal figura era Carlos Chacho Álvarez, con el propósito de disputar las elecciones frente al justicialismo.

La convergencia del Frepaso con la UCR, plasmó la naturaleza pequeño burguesa de su proyecto y determinó su ruina como alternativa independiente. El Frepaso en su alianza con los radicales contribuyó a consolidar la estrategia electoral de la UCR y su base de masas. (Luis Bilbao. La gran prueba. Crítica de Nuestro Tiempo No. 25. Buenos Aires. diciembre 2000–marzo 2001 p.42)

En su empresa de conquistar el poder la Alianza supo centrar su campaña electoral en el rechazo por parte de la opinión pública a las frivolidades de Menem y la corrupción de su entorno. El candidato de la Alianza, el radical Fernando de la Rúa se apoyó en sus éxitos como alcalde de Buenos Aires. La propuesta básica de la Alianza fue la de “cambiar los objetivos de la política económica” y en tal medida hizo hincapié en la crítica de la política neoliberal y en particular al sofisma del mercado como organizados social (“El gran cambio. Síntesis de la Plataforma de la Alianza: Un programa de desarrollo económico y social que abre un nuevo camino. Empleo trabajo, salud, educación e igualdad de oportunidades para todas las argentinas y todos los argentinos, A Quién Votar, ” , Buenos Aires , 2000–2001, aquienvotar.com)

La candidatura justicialista del gobernador saliente de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde se presentó con la debilidad que le daba la herencia social y política de Menem, y aún sin contar con el apoyo de todo el Partido Justicialista y de su presidente quien acarició la posibilidad de una tercera reelección. Por demás la dirección del Partido Justicialista al llevar adelante el liderazgo de la reforma neoliberal se transformó en una burocracia enriquecida con la corrupción y completamente colocada al servicio del establishment, posición que le acarreo la beligerancia electoral de los sectores del bloque burgués afectados por tal alineación.

Las cúpulas de la burocracia sindical tradicional (coptadas por completo de las bases, pero controlando las organizaciones que éstas reconocen) continuaron

respaldando al Partido Justicialista. Una franja de dirigentes de sindicatos menores se sumó al Frepaso y terminó haciendo campaña a su favor. Pero ni una ni otra fórmula sindical ganó adhesión activa y confiada en las filas de los trabajadores. Otro tanto ocurrió durante el mismo período con gran parte de las denominaciones de izquierda.

En los comicios presidenciales la Alianza y su fórmula De la Rúa – Chacho Álvarez ganó con casi el 48,5 por ciento de los votos y el gran derrotado fue el justicialismo (Eduardo Duhalde - Ramón Palito Ortega) con un 38,2. La gran sorpresa fue el tercer puesto alcanzado por el binomio Domingo Cavallo - Carlos Beliz, candidatos del Partido Acción por la República, organizado por el propio ministro de economía con vistas a las elecciones.

Los radicales obtuvieron ocho de los diez ministerios de ese gobierno, mientras que las carteras de Trabajo y Acción Social quedaron en el Frepaso.

En el escrutinio simultáneo para renovar 130 de los 257 diputados federales, la Alianza ganó 121 escaños para convertirse en el principal grupo parlamentario. El justicialismo quedó finalmente con 99 bancas. El partido de Cavallo logró 12 puestos con lo que se hizo el potencial aliado de la Alianza para alcanzar los 130 votos que precisa el logro de mayoría en esa instancia del legislativo argentino. Los restantes 25 escaños están en poder de otras agrupaciones políticas de menor incidencia en la vida política del país.

A pesar de los avances de la Alianza en las elecciones del legislativo, el justicialismo continuó con un importante lote de bancas en la Cámara de representantes y domina el Senado. Por otra parte constituyen mayoría en las gobernaturas provinciales.

La política económica de la Alianza: continúa el menemismo

La Alianza al asumir el gobierno del país, debió hacerse cargo de la crisis heredada de la década menemista, pero el gobierno recién electo encabezado por el presidente Fernando de la Rúa, no tenía otra propuesta que no fuera relanzar el mismo modelo económico mediante dosis ampliadas de endeudamiento externo. Desde el primer día en la dirección del país, el discurso de la plataforma electoral fue abandonado y el mercado continuó siendo la brújula del equipo gobernante. Así Fernando de la Rúa apareció armado con un “programa de austeridad” del FMI, desde el mismo 10 de diciembre de 1999 y su regalo para el pueblo argentino fue lo que popularmente se conoció como el “impuestazo”.

La reforma económica aplicada por el Gobierno fue establecida con preciso espíritu clasista. Protegió los intereses del gran capital y no apuntó a mejorar la recaudación eliminando los privilegios que el régimen de exenciones impositivas otorgaba a las rentas del capital financiero y accionario. Por lo contrario, lejos de ampliar la base contributiva del impuesto incrementó la presión sobre los actuales

contribuyentes: básicamente, los perceptores de ingresos medios provenientes del trabajo personal, tanto asalariados como autónomos.

Los pronósticos de las actividades económicas fallaron. No tuvo lugar el aumento esperado de la recaudación, no se cerró la brecha fiscal, ni tampoco tuvo lugar el shock positivo sobre las expectativas de los operadores financieros. El efecto negativo del “impuestazo” sobre las expectativas de consumo doméstico fue mayor que el impacto positivo que se esperaba lograr, con lo que tuvo lugar un nuevo golpe recesivo sobre los alicaídos niveles de la demanda interna. De aquí que se planteara la necesidad de nuevos ajustes destinados a reducir la brecha fiscal y restituir la confianza de los mercados.

Nuevamente los trabajadores fueron los sujetos preferentes del ajuste. En esta ocasión, el instrumento fue la reducción de las remuneraciones del personal de la administración pública y junto con esta medida se impuso la sanción legislativa de una reforma laboral. El objetivo central de la reforma laboral fue el de crear el marco legal para proceder a la revisión de los convenios colectivos de trabajo vigentes y lograr reducir los salarios con nuevos reajustes.

La nueva ley argentina del trabajo contemplaba, entre otras cosas, la ampliación del periodo de prueba de los trabajadores y relegaba la importancia de los sindicatos en algunos casos de negociación colectiva. Aunque el proyecto aprobado fue atenuado en las pretensiones iniciales del Gobierno, por las enmiendas introducidas por el Senado (de mayoría justicialista), la esencia de la reforma sigue siendo la misma.

El intento fue tan carente de equidad como ineficaz para promover el ambiente de confianza requerido por “los mercados”. La fluidez en el ingreso de capitales no se restableció y la renovación de los vencimientos de la deuda pública fue haciéndose cada vez más incierta. El aumento de las tasas de interés y del indicador de “riesgo país” que monitorea la banca extranjera, puso en evidencia la cercanía de un escenario de “país en riesgo”.

En atención a los sucesivos ajustes del presupuesto en el primer año de mandato el gobierno rebajó el salario de los empleados del Estado —del orden de los 424 millones de pesos—, emprendió una reducción de bienes y servicios —de un monto de 357,5 millones de pesos—, reformó la ley laboral y terminó el 2000 -29 de diciembre - con el decreto de reforma del sistema de jubilaciones. Esta última medida dio inicio al nuevo siglo argentino en un marco de conflictividad social y política generalizada.

Para finales del 2000 el plan económico del presidente De la Rúa había fracasado estrepitosamente. El PIB acusó un decrecimiento del 0.5 por ciento y la inversión () tuvo una variación del -8.3 por ciento respecto a la de 1999. La deuda externa del país alcanzaba los 145 mil millones de dólares lo que significaba el 50 por ciento del PIB. La economía se fue hundiendo en una gran recesión. Existía un creciente retraimiento productivo y la perspectiva concreta era de incertidumbre,

con fuga de capitales, presiones sobre el tipo de cambio e inestabilidad del sistema financiero. El desempleo y la subocupación rondaron la cifra del 15 por ciento.

La no recuperación de la economía con las medidas del gobierno de la Alianza constituía un fenómeno mucho más agudo dado el carácter acumulativo de la situación existente en el país. Entre 1994 y 2000 el ingreso nacional cayó 1.6 por ciento, "por lo que desde hace seis años que no solo no vemos ninguna recuperación en nuestros ingresos, sino que ahora son menores a los de 1994", señalaba en enero del 2001 el economista argentino José Luis Espert. El especialista precisó además que por cada 100 pesos reales en bienes que se generan, solo 93 quedan dentro del país, porque los restantes siete pesos van a parar a manos de extranjeros por pagos de intereses de la deuda externa y remisión de utilidades de compañías extranjeras. (Notimex, Buenos Aires, 25 de enero del 2001).-

En este escenario de crisis latente hizo su aparición el llamado "operativo blindaje" como recurso del capital transnacional tendiente a garantizar la capacidad de pago del país. Así el "blindaje" en primer lugar expresa un compromiso de los prestamistas institucionales (FMI, y bancos de los principales países acreedores) de que habrían de poner a disposición del gobierno argentino un monto de financiamiento tal que le permitiera afrontar buena parte de los vencimientos de la deuda y del déficit fiscal previstos para el año 2001. Así el blindaje expresa la voluntad de los mayores acreedores de renovar la capacidad de pago argentina para los próximos vencimientos de la deuda y evitar el riesgo de cesación del pago de estos compromisos. Tal política procuraba entonces emitir señales de tranquilidad al resto de los operadores financieros y evitar - al menos en el curso del año - un caos que los perjudicaría a todos.

La sanción definitiva al llamado blindaje financiero se produjo en Washington durante la primera reunión (12 de enero) del 2001 del directorio del FMI. El Fondo se comprometió a entregar 14 mil millones del total acordado. El resto lo aportaron los Bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (dos mil 500 millones cada uno), los denominados bancos creadores de mercado (10 mil millones), España (mil millones) y otras entidades locales (tres mil millones). Los restantes siete mil millones saldrían del canje de la deuda. Inmediatamente después de la aprobación del paquete habrá un desembolso de unos tres mil millones, que se sumarán a otros dos mil 100 ya girados por el FMI, pero que corresponden a un préstamo anterior.

En febrero del 2001 la situación económica y social se agudizó aún más con varios eventos políticos, en particular con una acusación de lavado de dinero que implicaba al gobernador del Banco Central, Pedro Pou. Constantemente llegaban informaciones diarias del riesgo - país y de la desconfianza de los acreedores sobre la capacidad de pago de la Argentina. La producción no sólo no arrancaba, sino que retrocedía: -2,7% en el primer trimestre del año -. A este panorama se

sumó la protesta popular y estudiantil masiva y la renuncia - el 2 de marzo - del titular de economía José Luis Machinea.

Luego de un paso efímero por la cartera de economía de Ricardo López Murphy, que amenazó con nuevos ajustes; el presidente De la Rúa optó por llamar a formar parte del gabinete a Domingo Cavallo, el artífice argentino de la convertibilidad y su rival en las elecciones presidenciales.

En su segunda oportunidad al mando de la economía del país, Domingo Cavallo cuenta con una situación muy distinta. Las tasas de interés estaban mucho más elevadas que las que le tocó en su primera gestión y en estos días no sobran inversores ni inversiones. Ya no tiene los activos del Estado que lo favorezcan con 30.000 millones de dólares y prácticamente se han vendido “todas las joyas de la corona”. Las crisis y los colapsos financieros de países, se suceden cada uno o dos años. Hay retraimiento productivo y recesión persistente en muchas regiones.

El Instituto de Estadísticas y Censos de Argentina divulgó las cifras oficiales del desempeño económico durante los primeros tres meses del año. Según el organismo, el Ministerio del Trabajo y las cámaras empresariales, las ventas de automóviles retrocedieron 55%. La producción textil bajó 18,7% y las ventas al detalle disminuyeron 13,4%. En una medición desde el segundo semestre del año 2000, las inversiones brutas cedieron al menos 10%. El sector de la construcción se contrajo en 5,9% en los primeros tres meses de 2001; el descenso se ubica en casi 20% desde principios de 1999. El consumo de alimentos básicos también cayó 7,5% en 2001. Durante el mismo período, el consumo de medicamentos bajó 5%. En cuanto a las exportaciones de carne, registraron un descenso debido al brote masivo de fiebre aftosa. Mientras, el resto de las ventas en el exterior se encontraban en peligro, ante las posibles devaluaciones del real y del euro. Adicionalmente, según cifras del Ministerio del Trabajo, el índice de empleo del sector privado bajó 0,6% (Noticias en eluniversal.com, Primera plana: Argentina gana tiempo y confianza, mayo del 2001)

Al retomar las riendas de la economía Cavallo declaró que para equilibrar las cuentas fiscales era preciso recuperar 3 mil millones de dólares, ya no 2 mil millones como aseveraba López Murphy. Sin embargo intentó dar tranquilidad al afirmar que no realizaría ninguno de los recortes que planeó su antecesor. En lugar de ello, declaró que lucharía contra la evasión, la corrupción, el contrabando y otras estafas al fisco para recaudar el dinero necesario. También prometió atraer inversiones, recuperar los capitales que emigraron a otros centros de inversión y reactivar la economía. Para ello pidió que el Congreso Nacional le confiera poderes especiales y comenzó un intenso accionar tanto nacional como internacional.

El último jueves de abril del 2001 Cavallo anunció un intercambio de títulos de la deuda externa por el 45 por ciento del Producto Interno Bruto del país. El canje de

bonos que vencían en los próximos cinco años por papeles de mayor duración permite posponer el pago de aproximadamente 16 mil millones de dólares de deuda antes de 2006 cuando casi la mitad de esas obligaciones se vencía en los próximos 18 meses. El canje por un monto total de 29,5 mil millones de dólares evitó así una moratoria potencialmente desastrosa y tuvo el propósito de intentar imprimir nueva marcha a su economía. Sin embargo pronto se vería que a pesar de esta operación la situación no daría síntomas de recuperación. Más bien la crisis argentina adquiere velocidad.

El realidad el arma de Cavallo para serenar a Washington y al partido de los capitalistas extranjeros, fue incrementar los impuestos al consumo y recortar gastos que alcanzan a la seguridad social. Sin embargo la multiplicación de las cargas impositivas se traducirá en una inexorable reducción del consumo en particular de las capas medias de la población, que vienen siendo víctimas de un ajuste perpetuo. El aumento de los impuestos en general no mejora el déficit. A comienzos del año 2000 la recaudación disminuyó de 55.520 millones (en 1999) a 53.544 millones de pesos (una disminución del 3,4 por ciento). En los tres primeros meses de 2001 la recaudación se contrajo de 13.700 millones a 13.395 millones (es una baja del 2,2 por ciento en un trimestre). En abril, pese al imperio del impuesto a los débitos y créditos bancarios, la recaudación se achicaría entre 5 y 6 por ciento.

La estrategia de Domingo Cavallo para resolver el problema productivo fue poco ortodoxa al intentar "devaluar sin devaluar". Con un llamado 'Plan de Competitividad', Cavallo persiguió reducir costos para las empresas hasta en 20%, comenzando por los sectores más golpeados debido a la sobrevaluación del peso (5). En este propósito las industrias textil y automotriz fueron atendidas con alivios fiscales y otras ayudas. Sin embargo las posibilidades de continuar con estas medidas se reducen en el mediano plazo. En 2002, la situación será diferente. El país se verá en la necesidad de recabar aproximadamente 12 mil millones de dólares entre los inversionistas, incluso luego de haber recibido ayuda del Fondo Monetario Internacional y aún después de haber ganado cierto tiempo con el canje de deuda .

El fracaso de la política económica gubernamental se confirmó con cifras al cierre del primer semestre. El Estado cerró con déficit de cinco mil millones y ante tal problema la respuesta del ejecutivo fue la de anunciar el séptimo ajuste fiscal en 19 meses de gestión: nuevas reducciones de salarios de los empleados públicos, los jubilados y pensionados en un dudoso intento de lograr en lo inmediato un déficit fiscal cero. En tal propósito el ministro de economía, Domingo Cavallo, reveló la fórmula de solo pagar salarios y deudas del Estado, de acuerdo con lo que se recaude mes a mes a partir de medidas para reducir la evasión y aumentar el impuesto a transacciones financieras.

La denominada Ley de Déficit Cero reduce en un 13 por ciento los salarios de los empleados públicos y las jubilaciones mayores de 500 pesos, pero la poca recaudación y el empeño de las autoridades en mantener inalterable los pagos de

la deuda externa de casi 150 millones de dólares apuntan a nuevas rebajas de sueldos y recortes en otros acápite de impacto social.

Con la promulgación de la Ley de Déficit Cero De la Rúa alcanzó el reconocimiento publico de las altas esferas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y con ello el anuncio del inmediato desembolso de mil 200 millones del blindaje que estaban programados para ser entregados en septiembre. En esta dirección se hizo pública la garantía otorgada por el Subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, John Taylor, para un adelanto de mil 200 millones de dólares por parte del FMI.

El desembolso del FMI, sin embargo, no cubre las urgencias de la economía argentina. La aguda crisis financiera esta marcada ahora por una creciente retirada de fondos de los bancos, que ascendió en julio pasado a cerca de seis mil millones de pesos, unos 330 millones por día, según un Informe de la Fundación Capital, encabezada por el ex ministro de economía Ricardo López Murphy (7). Es por ello que la administración de este país sudamericano buscó un nuevo crédito especial adicional que tendría un carácter de contingencia para respaldar las reservas monetarias y afianzar los depósitos bancarios.

A principios de setiembre el Directorio Ejecutivo del FMI en un nuevo intento de parar una catástrofe que puede tener repercusiones al sistema internacional, aprobó aumentar el programa con Argentina en 8 000 millones de dólares, con lo que el nuevo paquete financiero llega a casi 22 000 millones de dólares. De inmediato el país contó con los 6 300 que Cavallo señalaba como imprescindibles, y otros 1 240 se le facilitarían en el curso del 2001, luego de la revisión de rutina de los funcionarios del Fondo.

Los últimos acontecimientos ratifican que en las circunstancias de Argentina, nada se puede esperar de operativos tipo “blindaje” y “canje”. A partir de la aguda recesión interna y de lo que hay que pagar por intereses de la deuda externa, crece de manera sostenida déficit fiscal. La asistencia financiera comprometida no alivia las restricciones estructurales que configuran el cuadro actual de incertidumbre y estancamiento de la economía argentina y si llevan el problema de la deuda a un nivel explosivo. En junio del 2001 el Producto Interno Bruto había caído en un 2 por ciento. También mermó la producción de bienes un 4 por ciento y la inversión descendió un 9 por ciento. (6)

No hay ninguna razón para creer que este panorama vaya a mejorar. Es más, con el “empalme” (la canasta de monedas dólar —peso— euro para el sector externo e importaciones) se ha iniciado el camino de la devaluación.

Una política internacional con más dudas que certezas

Argentina ha tenido una débil tradición en política exterior. A diferencia de otras naciones que hicieron del mundo un espacio de oportunidades propias, la Argentina estuvo durante mucho tiempo encerrada sobre sí misma. A partir de la

llegada en 1989 de Menem, este avanzó con un conjunto de señales fuertemente demostrativas de cuál sería la direccionalidad de la política exterior durante su década de mandato: rígido alineamiento político militar con Estados Unidos (Tlatelolco, desmantelamiento del Cóndor, continua hostilidad hacia Cuba), apoyo a las aventuras intervencionistas con cobertura de la ONU (intervención en el Golfo, misiones con los cascos azules) y el consecuente retiro de foros tercermundistas como los No Alineados. En tal perspectiva Menem definió una orientación de política exterior dada por:

Las relaciones —“carnales”— con los Estados Unidos, como elemento prioritario de su política hemisférica y mundial.

Las relaciones estrechas con el bloque militarista de la OTAN y asunción de la condición de aliado extra OTAN.

La política exterior al servicio de una pretendida inserción como país del primer mundo.

El alejamiento de los foros tercermundistas.

Un bajo perfil en las relaciones hemisféricas

Una relación conflictiva con Brasil y un avance contradictorio de la integración vía Mercosur

El mejoramiento de relaciones con Gran Bretaña y la negociación pacífica de la descolonización de las Malvinas.

Una notable ideologización de carácter anticomunista y reaccionario en su discurso político exterior.

El gobierno del presidente Fernando de la Rúa ha manifestado un definido continuismo con la política exterior del menemismo. A raíz del cambio presidencial en Estados Unidos el canciller argentino, Adalberto Rodríguez Giavarini, ratificó su alineación con Washington y descartó que fueran a producirse "cambios de fondo" en las relaciones de su país con Estados Unidos tras la toma de posesión de George W. Bush. Al referirse a la llegada del republicano George W. Bush a la presidencia de Estados Unidos, el jefe de la diplomacia argentina considero que ahora existe "una nueva oportunidad para continuar avanzando en nuestros intereses mutuos, que son muchos". "Me atrevería a afirmar que no se avizoran cambios de fondo en el desarrollo de una relación bilateral que en el ultimo año de la administración saliente (de William Clinton) no hizo mas que incrementarse", aseguro. Para Giavarini "la interdependencia reciproca con la primera potencia militar y económica resulta a todas luces prioritaria como mercado potencial y como fuente de financiamiento y de tecnología de vanguardia" (14).

La vocación ideológica a la que Giavarini da continuidad se sustenta en el hecho definitivo de que el modelo de la convertibilidad implica definiciones políticas tanto internas —sobre el reparto de la riqueza y el poder— como en la articulación externa de la Argentina, en particular en el tema del endeudamiento y como resultado de este, una dependencia sustancial del voto norteamericano en los organismos financieros. No obstante el prolongado abrazo desde Menem hasta De la Rúa, con Washington, tal relación se articula sobre referentes particulares. La alineación político ideológica, la relación político estratégica, y la relación

económica no necesariamente constituyen una misma unidad de contenido. Esto se debe a que la coherencia que se aprecia en otras áreas del continente en relación con la potencia hegemónica, aquí aparece fracturada.

Aunque pesan los mecanismos de la tradicional hegemonía de los Estados Unidos en América Latina —el hecho de que aún continúa siendo el primer país en el monto total de las inversiones extranjeras en el país—, su poder en el FMI y el Banco Mundial; las fortalezas del imperio son estratégicamente compensadas por los intereses europeos, en especial de España y Alemania, a lo que se suma la privilegiada situación comercial que posee con Brasil y otros países vía Mercosur.

En temas de política comercial, inversiones, cooperación internacional, medio ambiente y otros, la posición de la cancillería argentina es favorable a matizar la alineación con Estados Unidos, sin dejar por ello de mantener un favorable discurso hacia la potencia del Norte. El tema agropecuario es un punto de conflicto frente a la política proteccionista estadounidense, como también lo es con la Unión Europea.

El gobierno de la Alianza no ha dado muestras de revisar su condición de “aliado extra OTAN”, en particular continúa participando con fuerzas militares en Kozovo. Tal designación continúa por demás el interés de privilegiar las relaciones con Europa y buscar una relación ventajosa con la misma. Esta relación —y en particular las transnacionales europeas—, han intervenido de manera muy activa en el tema de las Malvinas. En 1992 se restablecieron las relaciones diplomáticas plenas con el Reino Unido.

De la Rúa ha continuado la política de normalización con Gran Bretaña y se precia de sus relaciones con el primer ministro laborista Tony Blair. Ambos han celebrado varias entrevistas en el marco de la Internacional Socialista a la que pertenecen sus partidos. El canciller Giavarini, a mediados de julio visitó Gran Bretaña ocasión en la que el gobierno de ese país anunció que el Reino Unido había dado el visto bueno para que Buenos Aires sea la sede permanente de la Secretaria General del Tratado Antártico, lo que se interpretó como un gesto de buena voluntad de los británicos. A su vez Tony Blair incorporó el país austral a su gira latinoamericana de agosto del 2001 y se convirtió en el primer jefe de Gobierno del Reino Unido que visita Argentina, 19 años después de la guerra de las Malvinas.

El proyecto del Mercado Común del Cono Sur (Mercosur) como uno de los ejes de la política exterior argentina está sometido a diversas dinámicas de signo negativo:

En 1991 el gobierno de Carlos Menem participó en la fundación del Mercosur, inicialmente junto a Brasil, Paraguay y Uruguay. Este pacto regional tenía su origen en un acuerdo bilateral de comercio firmado por Argentina y Brasil en 1986, el cual se amplió en 1990 para formar una zona de libre comercio. El nacimiento

del bloque subregional dinamizó notablemente el comercio entre Argentina y los países asociados, en primer lugar con Brasil. En un clima de franco despliegue del mercado común que le era sustancialmente favorable Argentina firmó en 1995 el arancel externo común. Iniciativa surgida en el momento de pleno auge del modelo neoliberal en el país, su desarrollo posterior encuentra un nuevo escenario en la medida que comienzan a surgir los problemas económicos en ese país y se acentúa su dependencia de la banca internacional y del sector transnacionalizado, y en consecuencia, aumenta su fragilidad ante las presiones de esos agentes a favor de la ruptura de los privilegios concedidos a Brasil y sus socios del Mercosur.

Frente a la continuidad del proyecto mercosuriano y por tanto el desarrollo de la industria y el comercio nacional, comenzaron a ganar fuerza las tesis que defendían el retroceso del pacto a una Unión Aduanera flexible, camino a sólo mantener un Área de Libre Comercio. La idea que promueven los que están contra el desarrollo del Mercosur sería la panacea de los intereses transnacionales: en un área de libre comercio cada una de las partes debe asegurar el libre flujo de bienes entre sí, pero retienen la capacidad de fijar sus políticas respecto del resto del mundo, tanto en materia de tarifas aduaneras (aranceles) como del resto de las políticas comerciales (reintegros, estímulos, etc.). En ese contexto la Argentina se aseguraría el acceso irrestricto y discriminatorio a su favor, es decir preferencial, a un mercado que como el brasileño es algo más de dos veces su propio mercado. El precio a pagar por este acceso a la demanda del noveno o décimo mercado a escala mundial, sería bien bajo.

La tesis de la necesidad del Mercosur es defendida por los sectores de la burguesía vinculados a la exportación y quienes aspiran a rescatar un proyecto de desarrollo autónomo frente a la transnacionalización del país. Estos sectores apuntan al hecho incuestionable de que Brasil es el único socio comercial importante con el cual la Argentina registra un superávit comercial de valor significativo (alrededor de mil millones), siendo que, por otra parte, la Argentina presenta déficit crecientes con los países del NAFTA, de la Unión Europea y de Asia. Desde tal realidad defienden el comenzar inmediatamente una negociación seria y objetiva del proceso de convergencia macroeconómica entre los países miembros, apuntando en el mediano y largo plazo al establecimiento de una Unión Monetaria Regional y de una moneda supranacional que disminuya la volatilidad cambiaria intrarregional. (15)

En tal panorama la propuesta norteamericana del ALCA constituye un importante punto de definición. Brasil y la mayoría del bloque del Mercosur plantean el ALCA como opción una vez estén unidos y consolidados en el Mercado Común del Sur y en un perspectiva mercado sudamericano.

A iniciativa de Brasil, se está concretando el Área de Libre Comercio de América del Sur (ALCAS): Bolivia y Chile son desde 1996 miembros asociados y complementarán hacia el año 2006 una zona de libre comercio con el Mercosur.

Además, Chile se incorporó en 1998 a la estructura institucional del Mercosur, pero decidió no participar en las reuniones relacionadas con la unión aduanera, ya que su arancel externo unificado del 11% es más bajo que el del Mercosur. Venezuela ha manifestado su decisión de asociarse al Mercosur, por esta vía se ha acelerado la voluntad de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para construir un gran mercado Suramericano.

Una futura ALCAS —entre el Mercosur, Chile y el CAN— integraría diez países, más de 300 millones de habitantes y tendría un PIB superior a 1,3 billones de dólares. En tales perspectivas la opción estratégica se ha polarizado cada vez más como Área de Libre Comercio de las Américas o Mercosur.

Menem como principal aliado de los Estados Unidos en el Mercosur, asumió un papel clave en la primera fase de las negociaciones sobre el ALCA, durante la II Cumbre de las Américas en Santiago de Chile, en 1998. Así, Argentina —que exporta en un 60% productos agrícolas— quedó como presidente del Grupo de Trabajo sobre Agricultura, ostentó la vicepresidencia del ALCA. En esta reunión quedó convenido como el país austral asumiría entre noviembre de 1999 y abril de 2001 la presidencia. (16).

De la Rúa ha dado en la práctica continuidad a los compromisos de Menem respecto al ALCA. En su primer año de gobierno no dio signos concretos de su alineación definitiva por el pacto sudamericano, ni cumplió las expectativas de mejoría sustancial de las relaciones con Brasil tras las agudas controversias con las que finalizó el mandato Menem.

Desde el ingreso de Cavallo al gabinete la relación entre los dos socios mayores del Mercosur volvió a tensarse. Cavallo directamente pidió prerrogativas para incidir sobre temas como el Mercosur, ya que las medidas de política económica interna que pretendía tomar cuestionaban muchos aspectos del funcionamiento del área de libre comercio de la región. Y aquí se introdujeron nuevas y serias complicaciones con el bloque subregional y en particular con Brasil, país al que exporta el 60% de su líneas de producción para el exterior. De la Rúa en la cita de Quebec se sumó al consenso pro ALCA y no secundó las observaciones puntuales que hizo sobre el futuro de ese convite el presidente Cardoso. Por su parte Cavallo y sus principales voceros han manejado públicamente la posibilidad de que Argentina firme el ALCA independientemente de Brasil y sus socios del Mercosur.

La ostensible divergencia entre Brasil y Argentina tuvo un punto de máxima tensión en los días previos a la reunión cumbre en la capital paraguaya. Las agresiones verbales de Cavallo complicaron al extremo la política de Itamaraty, empeñada en evitar un choque frontal. Ese papel ha quedado a cargo de la prensa brasileña, que califica al ministro argentino con inusual dureza.

En la Cumbre de Asunción más allá de las declaraciones diplomáticas no hubo un sólido acuerdo de fondo entre los dos países centro del Mercosur. Todo parece

indicar que de parte de Argentina, los compromisos con el bloque se muestran cada vez más frágiles y serían fácilmente fracturados si fuese menor su dependencia comercial en relación con Brasil”.

Las últimos acuerdos colectivos al calor de la celebración de los diez años del pacto en la Cumbre de Asunción —21 y 22 de junio del 2001—, marcaron un avance importante para el bloque regional: se elevaron los impuestos de importación para productos agrícolas subsidiados en los mercados de origen, con lo cual se bloqueará el ingreso de estos productos por un monto superior a los mil millones de dólares anuales; se esbozó un acuerdo destinado a poner en marcha desde septiembre próximo el libre comercio de automotores; y se resolvió formalizar un “grupo negociador” para entablar discusiones con Estados Unidos (la fórmula 4 + 1, ya defendida en los comienzos del Mercosur). (17)

¿Resolvió Argentina su ambivalencia y adoptó una línea definitiva de alianza estratégica con Brasil? Es improbable. La fuerza que impuso este curso en la coyuntura la expuso Cavallo en la cita de Asunción: “Los mercados de Estados Unidos y Europa están muy cerrados. La negociación Mercosur —Europa y MERCOSUR— Estados Unidos es una herramienta muy eficaz. Podremos negociar cupos más amplios”(18). El ministro soslayó un dato más inmediato en relación con su ansiedad por abrir mercados: la amenaza, sutilmente explicitada por el presidente Fernando Henrique Cardoso, de que Argentina pierda a Brasil como comprador: si no existiese el Mercosur, le recordó Cardoso en una hipótesis retórica supuestamente enderezada a celebrar los diez años del bloque, “quizá Argentina no estaría comprando automóviles, autopiezas y tantos otros productos brasileños. Y tal vez Brasil no estaría importando petróleo, trigo y automóviles de Argentina”(19)

En general, incluída la voluntad de integración o sabotaje, de unos u otros actores, el dilema y el papel de Argentina con relación al ALCA versus Mercosur están mucho más vinculados al drama de la crisis argentina, a la dependencia del visto bueno del FMI, que a la realidad de sus vínculos con el Mercosur. Así mientras la estructura productiva creada durante décadas de desarrollo nacional, está diseñada para tener una salida beneficiosa vía Mercosur; el problema de deuda y la enfermiza necesidad de financiamiento externo impone la prioridad de evaluar el ALCA con los norteamericanos.

El futuro de la crisis argentina, la salida a la explosión de la deuda externa puede tener consecuencias funestas para el pacto regional, caotizar las relaciones económicas en el área y adelantar la desestabilización financiera y comercial de Brasil y sus socios. De ahí el apoyo dado por Brasil y el bloque en su conjunto al programa económico de De la Rúa y Cavallo, incluido el levantamiento temporal de los beneficios aduanales negociados en el Mercosur.

La convertibilidad - y más aún una completa dolarización- pueden amenazar seriamente la posibilidad del país para profundizar el proyecto del Mercosur - la

unión monetaria en particular - . Hay que tener en cuenta como las posibilidades de complementación entre los países que integran la organización subregional dependen de una serie de consensos básicos, que pasan por la coordinación de políticas económicas. Pero la convertibilidad argentina crea dificultades más allá de la existencia o no de una voluntad integracionista en el Ejecutivo: El gobierno argentino al renunciar definitivamente con la dolarización a los instrumentos de política cambiaria, monetaria y financiera, estaría avanzando su renuncia a tener una política económica propia, y no podría actuar en la coordinación en estas áreas que resultan sustanciales para el pacto. Tal opción definiría el paso incondicional del país austral al proyecto del ALCA y traería como consecuencia la fractura y perspectiva muerte del Mercosur.

Los avatares políticos de la Alianza

La unidad alcanzada para las elecciones pronto comenzó a sufrir fisuras. De la Rúa comenzó a favorecer las posiciones de derecha tanto al interior de su partido como en el ámbito de la Alianza, y las bases populares del Frepaso comenzaron a presionar contra la política económica y social que en negación al programa electoral se implementaba.

De La Rúa siempre estuvo alejado de las políticas de centro izquierda que impulsan sus socios de la Alianza, el Frepaso y un sector amplio de la UCR, liderado por Alfonsín. El primer nivel de contradicciones en esta dirección, se resolvió con el enfrentamiento ministerial que traería como consecuencia la salida del vicepresidente Chacho Álvarez del equipo gubernamental.

Por mandato constitucional, el vicepresidente del país encabeza la Cámara Alta y desde ese puesto Alvarez reclamo un esclarecimiento absoluto del tema de los presuntos sobornos pagados a senadores para conseguir la adopción de la reforma laboral impulsada por el gobierno. Chacho llegó a señalar a dos miembros del gabinete cuyas dependencias estaban de alguna manera envueltas en el asunto. Sin embargo, el presidente De la Rúa ignoró los reclamos al punto de no tenerlos en cuenta en un amplio reajuste ministerial decidido por él.

La dimisión de Alvarez el 6 de octubre del 2000 provocó una inusitada crisis política marcada por demás con el cambio de cinco ministros en menos de 10 meses. Para no profundizar la fractura de la Alianza, el dimitente insistió públicamente en la defensa de la coalición gubernamental; y tuvo que hacer frente a no pocas críticas desde el interior del Frepaso por lo unilateral de su decisión y la debilidad con que su salida colocaba al Frente dentro del gobierno y de la Alianza.

Los presuntos pagos de sobornos fueron investigados por un juez federal que interrogó a 11 legisladores, beneficiados finalmente con un dictamen de falta de mérito, con lo cual terminaron las pesquisas.

La decisión del gobierno de reformar el sistema de jubilaciones provocó una fuerte oposición en el país lo que repercutió una vez al interior de la Alianza. La firma del decreto creó una nueva y fuerte controversia política dentro de la coalición gobernante. Puntos principales de las críticas contra la decisión de la Rúa fueron la eliminación de la Prestación Básica Universal (200 pesos, igual en dólares), lo que representara una rebaja de entre el 13 y el 15 por ciento del monto actual que percibían los retirados, y la elevación de 60 a 65 de la edad de retiro para las mujeres. Esta medida presidencial fue considerada como parte de la negociación que realizó el gobierno para conseguir el llamado "blindaje" por parte del FMI.

La protesta popular y estudiantil masiva que dio al traste con la renuncia del titular de economía José Luis Machinea, reforzó la alineación hacia la derecha de De la Rúa. Machinea - ligado al ex presidente Alfonsín y al pensamiento económico que aún dentro del esquema neoliberal defendía la integración vía Mercosur -, se vio presionado por la desconfianza del *stablishment* y la falta de un apoyo político claro del presidente. (Dafne Sabanes Plou. Avance neoliberal agrieta al gobierno de la Alianza en Argentina. América Latina en Movimiento No.330. Ecuador. 30 marzo 2001. P. 1)

La renuncia de Machinea, le permitió a De la Rúa, recurrir a quien probablemente hubiera sido su ministro de Economía desde un primer momento, Ricardo López Murphy, un radical neoliberal a ultranza que intentó emprenderla de inmediato con un recorte presupuestario que atentaba directamente contra las bases de la enseñanza pública y en particular, la gratuidad de la educación superior.

Mientras López Murphy informaba de las nuevas medidas por radio y televisión, comenzaron a llegar al despacho presidencial las renuncias de otros ministros, el de Educación y el de Interior, y de todos los miembros de Frepaso en altos cargos del gobierno. Al finalizar el discurso del ministro, los estudiantes alertaron que ya habían tomado algunas facultades en la Universidad de Buenos Aires y los docentes decretaron un paro de 48 horas al que se unieron durante una jornada completa el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Corriente Clasista y Combativa, conocida por utilizar los cortes pacíficos de calles y rutas como su principal arma de protesta. En tal coyuntura la respuesta del presidente fue la de sacrificar a su ministro de economía, pero a su vez garantizar la continuidad de la política y reforzar su tendencia a la derechización. Así reapareció la figura del exministro Cavallo.

El futuro de la Alianza volvió a ponerse en duda tras la designación del nuevo ministro de economía y con la reestructuración ministerial que le siguió. La entrada del exministro de Menem y rival electoral, fue un serio desafío al interior de la Alianza, tanto en las relaciones con el Frepaso como con el propio Alfonsín. El hecho de que el gabinete quedara conformado por figuras del partido de Cavallo y amigos del Presidente y que en el mismo no aparecieran miembros del Frente o figuras cercanas a Alfonsín, dio la medida del cambio realizado. Definitivamente las figuras de centro izquierda fueron eliminadas y se creó un gabinete de derecha.

El Frepaso tras las medidas presidenciales manifestó su descontento y la abierta oposición a que Acción por la República ingresara a la Alianza. En tal coyuntura volvieron a reflotar dentro del Frente, las críticas a Chaco Alvarez por renunciar a la vicepresidencia. La diputada nacional Alicia Castro, culpó a Chacho de que el partido se hubiera convertido en "una fuerza política del pasado" y lo acusó, además, de ayudar a consolidar "al partido único de la exclusión y la pobreza que encarna Domingo Cavallo".(Juan Pablo Cafiero"El Frepaso no va a desaparecer". El Universal, Buenos Aires, Noticias en eluniversal.com,)

El gobierno de Fernando de la Rúa tras las nuevas designaciones acentuó su debilidad, lo que se expresa de manera muy explícita en la toma de distancia de la actuación del Gobierno del Frepaso y de los sectores del radicalismo que siguen a Alfonsín. Sin embargo la acentuación de este proceso de deterioro político, esta sujeto al propósito más inmediato que tiene la alianza en su conjunto: reducir el nivel de las divergencias con el Ejecutivo, precisamente en el transcurso de un año electoral.

El mundo de la política burguesa en el país, tiene en vista los comicios legislativos de octubre próximo cuando se votara por la totalidad del Senado (72 escaños) y la mitad de la Cámara de Diputados. Resulta evidente que las contradicciones al interior de la Alianza y la critica popular contra la actual administración tendrá gran influencia en los electores. En tal circunstancia los líderes de la Alianza toman medidas para no desdibujar más aún la unidad de las fuerzas gubernamentales y el presidente De la Rúa aprovecha y saca partido de tal necesidad para imponer sus no consensuados movimientos.

Mas allá de las intensiones políticas de los integrantes de la Alianza, el hecho real es que al cabo de un año y medio en el gobierno, en vísperas de las elecciones legislativas, la Alianza ya ha agotado la expectativa generada en los sectores sociales que antes habían confiado en el Frepaso y que, a través de éste, sacaron a la UCR de la tumba y la reubicaron en el poder. Este factor condiciona de manera decisiva el cuadro actual y las perspectivas futuras del gobierno. Y a ello se suma el hecho incuestionable de que el presidente De la Rúa carece de autoridad y capacidad de recuperación.

Un país acostumbrado al sesgo aplastante de los caudillos políticos (y lo fueron los dos últimos presidentes, Raúl Alfonsín y Carlos Menem, cada uno a su manera) tiene ante si a un líder enamorado del perfil bajo y de la palabra apenas murmurada, capaz de sopesar cada decisión - y cada detalle de cada decisión - durante semanas infinitas. Como contraparte asume un poder cada vez más protagónico su rival en presidencial, individuo interesado en hacer desde el ministerio de economía lo que el voto electoral le negó en las urnas.

Las investigaciones en curso sobre lavado de dinero, los procesos dentro y fuera del país contra connotados represores de la época dictatorial, la conmoción que provocó el caso de la privatizada Aerolíneas Argentinas - actualmente abrumada

por las deudas y al borde del colapso financiero -, y el encarcelamiento del ex Presidente Carlos Menem y algunos de sus colaboradores por estar asociados en la venta ilegal de armamento a Ecuador y Croacia; son hechos que se incorporan al cuadro de crisis del sistema burgués en el país. Dan por sí mismos una dimensión de cómo la clase dominante se ve en la necesidad de sacrificar algunos de sus elementos más corruptos.

Entre las perspectivas antisistémicas que comienzan a dibujarse aparece con identidad creciente el Polo Social dirigido por el sacerdote Luis Farinello. El Polo Social se presenta como una alternativa de política antineoliberal – Farinello ha llegado a afirmar que los neoliberales no son cristianos -. Las condiciones que impone Farinello para sus seguidores y en particular para la confección de las listas para las elecciones de octubre son "la representatividad de personas éticas y transparentes, con capacidad demostrada y que estén dentro del campo nacional y popular".

La principal presencia del Polo Social está en el cono urbano bonaerense. En una encuesta entre 600 personas, hecha en la primera semana de mayo, Farinello obtenía el 14 por ciento de la voluntad de voto para senador por la provincia de Buenos Aires. El radical Raúl Alfonsín lo aventaja por tres puntos (17%) mientras Eduardo Duhalde mantenía una ventaja del 29%. Frente a esta situación el sacerdote Farinello no se desanima. Con realismo asume lo difícil de competir con los líderes de las agrupaciones tradicionales, y ratifica que esta próxima contienda es sólo un momento importante: "Con intervenir, habremos dado el primer paso. Conseguiremos que elijan a algunos diputados de la lista. Y el verdadero desafío será en 2003".

Farinello se manifiesta equidistante de las fuerzas tradicionales de izquierda centro, pero confiesa su simpatía por los socialistas Elisa (Lilita) Carrió, Alfredo Bravo y Héctor Polino, que forman una agrupación propia. En tal actitud Farinello para octubre no competirá con la Carrió por la candidatura en la ciudad de Buenos Aires y ve como una perspectiva necesaria la alianza del Polo y los socialistas con vistas a las elecciones del 2003. (13).

Conclusiones

aunque el componente determinante continúa siendo que la burguesía mantiene incólume la iniciativa política.

Cualesquiera sean los ritmos de la marcha de la historia argentina, el establishment confrontará serias dificultades para intentar resolver el problema solo con alquimias electorales y alianzas políticas. Este es el rasgo fundamental de la fase en que ingresa el país.

Los arquitectos del neoliberalismo en Argentina alcanzaron su más importante objetivo. En general en el país el capital transnacional reina sin desafíos estatales y políticos, y sus agentes están empeñados en aumentar constantemente su

cuota de ganancias, aunque ello tenga como reverso el retrogradar en todos los planos las relaciones sociales y la propia condición de la nación como unidad cultural y entidad soberana. y en tal realidad subyace la vertiginosa decadencia del país. En tal realidad subyace la vertiginosa decadencia del país.

El modelo neoliberal en Argentina puede sintetizarse así: Estabilidad monetaria sustentada en un creciente endeudamiento, apertura externa comercial y financiera, fuerte privatización y extranjerización de la propiedad, disminución sustancial de las actividades del Estado y ejecución de políticas para infundir confianza en los inversores externos. Gobernabilidad y consecuente estabilidad político social basada en la desarticulación de los sectores populares, la manipulación de las cúpulas sindicales, y mediatización de las organizaciones y partidos de oposición en el marco de disputa electoral. Logro de una fuerte capacidad de exclusión política y económica a través de la promoción del individualismo y la mitificación del mercado. Hoy asistimos a la crisis de este modelo.

La crisis del neoliberalismo se manifiesta a través del múltiple deterioro de su situación económica y político social. El modelo neoliberal ha desmantelado el país, desembocado en la explosión de la deuda externa y comprometido gravemente el futuro del país.

Uno de los más evidentes factores de crisis es la subordinación del país y su pérdida de soberanía frente al FMI. Aunque este fenómeno de pérdida de independencia económica y de soberanía, tiene antecedentes en la dictadura, su conformación y estructuración como mecanismo ocurre decisivamente durante la década de Menem y De la Rúa continúa y profundiza tal proyección.

La situación actual de Argentina es extremadamente compleja. De la Rúa continuó con el modelo de la convertibilidad y los ajustes realizados contra los ya empobrecidos recursos de los sectores medios, la clase obrera y los trabajadores. Después de año y medio en el poder la Alianza no ha podido revertir la crisis del modelo neoliberal en el país. Son evidentes las contradicciones entre el sector burgués productivo - donde está lo que queda de burguesía nacional - y el bancario transnacionalizado.

Los últimos acontecimientos ratifican que en las circunstancias de Argentina, nada se puede esperar de operativos tipo "blindaje" y "canje". La asistencia financiera comprometida no alivia las restricciones estructurales que configuran el cuadro actual de incertidumbre y estancamiento de la economía argentina.

La ausencia de factores endógenos de crecimiento está en la propia raíz del modelo económico: Las políticas de ajuste fiscal no han hecho otra cosa que profundizar la espiral recesiva.

Con el "empalme" se ha iniciado el camino de la devaluación. Esta llegará como decisión organizada por los tecnócratas del patio o precipitada por las continuas

elevaciones del riesgo país, por una corrida bancaria u otro evento de carácter drástico.

La dolarización es otra posibilidad que avanza en el camino trazado de la convertibilidad. Con la segunda Argentina renunció a la política monetaria y cambiaria. De asumirse como alternativa por los neoliberales que gobiernan el país se trataría de abandonar definitivamente esos instrumentos y en términos concretos atarse a los designios monetarios y cambiarios de Estados Unidos, con la consecuente pérdida de soberanía. La dolarización supone también un aumento sustancial de la deuda externa.

Más allá de esta eventualidad, está claro que el torrente económico y social se precipita por un desfiladero y aumenta su turbulencia. Es que, sencillamente, el modelo no da más de sí. Argentina es un país quebrado y paralizado. Y no hay ninguna razón para creer que este panorama vaya a mejorar.

La visión dialéctica del organismo social argentino se completa con la expresión de sus relaciones internacionales y en particular del estado de la política exterior y sus retos:

La política exterior argentina en el ámbito estratégico está en función del modelo económico al que se ha arribado después de una década de construcción neoliberal. En tal medida la política argentina responde fundamentalmente a los intereses de quienes hoy usufructúan ese modelo: el *establishment*.

La coherencia que se aprecia en otras áreas del continente en relación con la potencia hegemónica, aquí aparece fracturada. Aunque pesan la hegemonía de los Estados Unidos en América Latina, el hecho de que aún continúa siendo el primer país en el monto total de las inversiones extranjeras, y el dominio que poseen en el FMI y Banco Mundial; estas fortalezas del imperio son estratégicamente compensadas por los intereses europeos y la privilegiada situación comercial que posee Argentina con Brasil y otros países de la subregión. En estas circunstancias el dilema consiste en que el actual gobierno argentino se debate entre el continuismo del entreguismo de Menem y las perspectivas de una inserción más independiente en el mundo vía Mercosur. En tal dilema no logra definir sus lealtades y prioridades.

El proyecto del Mercosur como uno de los ejes de la política exterior argentina está sometido a diversas dinámicas de signo negativo:

La convertibilidad - y más aún una completa dolarización – pueden amenazar seriamente la posibilidad del país para profundizar el proyecto del Mercosur. Hay que tener en cuenta como las posibilidades de complementación entre los países que integran la organización subregional dependen de una serie de consensos básicos, que pasan por la coordinación de políticas económicas. Pero la convertibilidad argentina crea dificultades más allá de la existencia o no de una voluntad integracionista en el Ejecutivo: Un gobierno argentino al renunciar

definitivamente con la dolarización a los instrumentos de política cambiaria, monetaria y financiera, estaría avanzando su renuncia a tener una política económica propia, y no podría actuar en la coordinación en estas áreas que resultan sustanciales para el pacto. Tal opción definiría el paso incondicional del país austral al proyecto del ALCA y traería como consecuencia la fractura y perspectiva muerte del Mercosur.

La Alianza en su ejercicio del poder negó rotundamente su programa electoral y para colmo entregó a los quince meses de gobierno, la cartera de economía a Domingo Cavallo, el ejecutor del plan de la convertibilidad y su oponente en las elecciones como representante del conservadurismo más recalcitrante. Al cabo de un año y medio en el gobierno la Alianza ha agotado la expectativa generada en los sectores sociales que antes habían confiado en el Frepaso y que, a través de éste, reubicaron a la UCR en el poder.

Las políticas de “oferta” impusieron la flexibilidad laboral como un elemento positivo para el crecimiento y la competitividad, pero está claro que lo único que han logrado es construir un ambiente generalizado de inseguridad sociolaboral. Inseguridad por la volatilidad del empleo y del salario, inseguridad que retrae, incluso, las demandas de consumo de grupos que aún mantienen alguna capacidad de gasto y/o endeudamiento.

La Alianza expresa su debilidad en la propia toma de distancia de la actuación del Gobierno del FREPASO y de los sectores del radicalismo que siguen a Alfonsín.

El presidente De la Rúa no posee suficiente autoridad y carece de capacidad de recuperación. Ha sido objeto de agudas críticas de diferentes sectores sociales por la lentitud de su gestión para capear la crisis económica, financiera y social que afecta a esta nación desde su asunción en diciembre de 1999. Su apuesta por la derechización del gobierno constituye un paso hacia las posturas conservadoras de Domingo Cavallo que lo alejan de las bases partidistas que los sustentan.

Con la descomposición de la Alianza y la aceleración de la crisis, el protagonismo popular volverá al centro del escenario político. Pero ya no para ser terreno de disputa entre propuestas que cuentan a la clase obrera y los estratos oprimidos de la sociedad como pasiva masa de maniobra para sus operaciones electorales, sino como fuerza social llamada como tal a obrar en uno u otro sentido – es decir, en función de sus intereses históricos o a la rastra de una variante burguesa - ante el arribo de la crisis a su punto de explosión.

Alarmado ante la posibilidad de que la presión social desemboque en un proyecto político alternativo – que ya se esboza en el crecimiento de multitud de organizaciones políticas y sociales y su eventual confluencia -, el establishment torna al habitual reflejo autoritario con lo que coloca en una situación difícil a no pocos políticos, tanto del gobierno como de la oposición. Este pedido explícito de reprimir - que tuvo su primer costo con los acontecimientos en Salta - se inscribe

en la necesidad de mantener el modelo a cualquier precio, pero agudiza la situación creada tanto al interior del bloque burgués como en el más amplio espectro de la sociedad civil.

La articulación de un polo conservador con la unión alrededor de Cavallo de todas las derechas puede conducir al país a una situación explosiva dado que tal espectro si bien cuenta con el apoyo del capital transnacional y potencialmente de los Estados Unidos, carece de base social para llevar a efecto su propuesta, más en un país donde el elemento militar aparece sustancialmente limitado para cumplir la misión represiva de la década del setenta.

El bloque histórico del consenso burgués aparece hondamente fracturado. En su conjunto y con particular fundamentalismo la elite del *stablishment*, buscarán – apelando previsiblemente a diferentes recursos y estrategias - formas alternativas destinadas no sólo a mantener el control político en la coyuntura de agravamiento extremo de la crisis, sino fundamentalmente a impedir que ésta sea motor para la puesta en movimiento de una fuerza que le dispute el poder en una fase posterior.

Por mucho que el justicialismo pudiera usufructuar el espectáculo penoso de la Alianza gobernante, por más que esta fuera castigada en las próximas elecciones legislativas de octubre; es evidente que la cadencia y la profundidad de la crisis no permiten relegar la recuperación del equilibrio al próximo turno electoral, y ni siquiera al que corresponde en el 2003 para reemplazar al Ejecutivo. No obstante el próximo turno electoral de octubre será un importante momento político para adelantar o postergar la crisis de gobernabilidad a la que parece abocado el país.

La situación actual comienza a plasmar la renuencia del pueblo argentino a seguir el juego de la partidocracia burguesa. Así es previsible que la próxima fase de la evolución política en Argentina recupere el protagonismo (independiente o subordinado, pero protagonismo) de las masas como factor predominante. Esto puede ocurrir mediante pasos intermedios, como por ejemplo la irrupción del movimiento estudiantil, la juventud y los desocupados, cada uno por su carril, en un primer momento. Pero fatalmente culminará con la reaparición del movimiento obrero y específicamente del movimiento obrero industrial en la lucha social y política, por fuera y en contra de las estructuras sindicales hoy extraordinariamente debilitadas.

De profundizarse esta tendencia al protagonismo popular se abriría potencialmente un ancho camino para la conformación de una fuerza de masas, plural, que plasme la independencia de los trabajadores y el pueblo argentino en busca de un destino propio. En tal escenario las perspectivas de unidad política y cohesión ideológica que construyen eventos como los encuentros nacionales por un Nuevo Pensamiento, y movimientos como el Polo Social que lidera el padre Farinello, constituyen interesantes elementos seguir desde una voluntad emancipadora

Cualesquiera sean los ritmos de la marcha de la historia argentina, el establishment confrontará serias dificultades para intentar resolver el problema solo con alquimias electorales y alianzas políticas. Este es el rasgo fundamental de la fase en que ingresa el país.

En estas circunstancias el dilema consiste en que el actual gobierno argentino se debate entre el continuismo del entreguismo de Menem y las perspectivas de una inserción más independiente en el mundo vía Mercosur. En tal dilema no logra definir sus lealtades y prioridades.